

Todo lo que necesita saber sobre la escandalosa DEA



Junio de 2015

Introducción

Hay un creciente consenso entre ambos partidos políticos de Estados Unidos sobre la urgente necesidad de una reforma en la justicia criminal de dicho país.¹ En palabras del Procurador General Eric Holder, “demasiados estadounidenses van a demasiadas prisiones por demasiado tiempo sin ninguna buena razón que corresponda a la justicia criminal.”²

Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial, pero casi el 25% de la población carcelaria en el mundo.³ La mitad de las personas en cárceles federales y casi el 20% de las personas en prisiones locales o estatales son encarceladas solamente por una violación a las leyes sobre drogas.⁴ Decenas de millones de personas más – quienes estuvieron tras las rejas por delitos de drogas – enfrentan dificultades para encontrar empleo o vivienda, para obtener préstamos escolares y otros beneficios públicos, y en algunos estados se les niega el derecho al voto.⁵

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha existido por más de cuarenta años, pero se le ha dado poca atención al rol que la agencia ha jugado al impulsar la encarcelación masiva, las disparidades raciales, y otros problemas relacionados con la guerra contra las drogas. El Congreso rara vez ha examinado a la agencia, sus acciones o su presupuesto; en cambio, le confía la decisión de cómo lidiar de la mejor manera los asuntos relacionados con drogas.

Tratar el uso de drogas como un problema de justicia criminal y no de salud pública, mientras se falla en exigir rendición de cuentas de parte de una de las más poderosas agencias en el mundo ha sido desastroso:

- Prácticas cuestionables, numerosos escándalos y violaciones a los derechos humanos, y fracaso en seguir los estatutos que requieren que sus decisiones sean basadas en evidencias científicas.
- La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia tiene abiertas al menos seis investigaciones sobre prácticas de la DEA.⁶
- La DEA está implicada en varios de los más grandes esfuerzos de espionaje a millones de ciudadanos inocentes de Estados Unidos y otros países.⁷

El Congreso debe considerar reformas significativas, incluyendo cambiar la medición del rendimiento de la agencia y combinar sus funciones con otras agencias.

Tres administraciones presidenciales (las de Carter, Reagan, y Clinton) han considerado si combinar las funciones de la DEA con la FBI [Agencia Federal de Investigaciones] sería más eficiente, y mejor para la seguridad pública,⁸ pero el Congreso estadounidense nunca ha explorado este dilema seriamente.

Los Hechos

La expansión de la agencia y la carga para los contribuyentes

- La DEA inició en 1973 con casi 1500 agentes especiales provenientes de otras oficinas gubernamentales ya existentes dedicadas a la guerra contra las drogas. Esta agencia emplea hoy en día a aproximadamente 5000 agentes especiales.⁹
- Por cada agente especial de la DEA, hay aproximadamente otro empleado en otra función. En 2015, la agencia agrupaba a más de 9200 empleados, incluyendo agentes especiales, investigadores, especialistas en investigación e inteligencia, químicos, y personal de apoyo.¹⁰
- La DEA tiene 221 oficinas domésticas en 21 divisiones, y opera también en 86 oficinas de 67 países.¹¹
- El costo de operaciones anual de la DEA se ha multiplicado treinta veces en cuarenta años, de \$75 millones en 1973 a \$2.03 mil millones para el año fiscal de 2015.¹²

Recursos policiales desperdiciados

- Entre 1986 y 2013, la DEA llevó a cabo 817518 arrestos dentro de Estados Unidos.¹³ La naturaleza de estos arrestos no es transparente, pero la mayoría de la gente encarcelada en prisiones federales está ahí debido a ofensas menores o medias, del tipo que las autoridades locales o estatales podrían manejar. Un reporte ante el Congreso en 2007 encontró que sólo 7.6% de los procesos por cocaína, y 1.8% de los procesos por cocaína en forma de crack perseguían a traficantes de alto nivel.¹⁴ Otro reporte ante el Congreso en 2011 produjo resultados semejantes: más de dos tercios de las personas en reclusión debido a violaciones de las leyes de drogas fueron de mediano o bajo nivel, y sólo el 10% fueron traficantes de alto nivel.¹⁵

- La Agencia de Prisiones (*Bureau of Prisons, BOP*) está tan abarrotado de personas que han violado leyes de drogas, que opera a más del 140% de su capacidad,¹⁶ costando a los contribuyentes aproximadamente \$7 mil millones de dólares al año.¹⁷
- Desde que el primer estado legalizó la marihuana medicinal en 1996, la DEA ha tratado de socavar los esfuerzos estatales para buscar nuevos acercamientos para el control de drogas a través de redadas a dispensarios, decomisos, y arrestos a quienes trabajan en estos establecimientos regulados estatalmente. Decenas de personas han sido encarceladas por proveer marihuana medicinal a quienes la necesitan, y muchas más han sido marcadas por arrestos sin cargos. La organización *Americans for Safe Access* estima que la DEA gastó cuatro por ciento de su presupuesto (más de \$100 millones) sólo en 2012 en perseguir la marihuana medicinal, incluyendo costos de supervisiones antes de los juicios, procesos criminales y civiles, redadas, arrestos, decomisos e incautaciones, investigaciones, encarcelamientos, y libertad condicional.¹⁸

Disparidades raciales y el “Nuevo Jim Crow” – un sistema de exclusión y discriminación

- Una evaluación en 2009 a la DEA encontró que la mitad de los sospechosos arrestados por la DEA eran 31 años o menos. Los sospechosos latinos constituyeron el 46% de los arrestos, seguidos por los sospechosos afroamericanos y blancos, con 26% respectivamente.¹⁹
- En la década de 1980, la DEA fue pionera en la práctica de incluir el perfil étnico o racial para determinar las características de posibles contrabandistas de drogas.²⁰ Mientras los perfiles fueron inicialmente diseñados para ser utilizados en aeropuertos, en 1986 la agencia lanzó la Operación Pipeline, un programa de interdicción de drogas que ha entrenado a más de 25,000 oficiales en 48 estados. Los perfiles étnicos o raciales son parte principal de los métodos de entrenamiento utilizados en Pipeline y otros programas similares, pues algunos de los materiales que usan y producen animan a enfocarse en transportistas de minorías.²¹

- Los perfiladores raciales de la DEA enseñaron bien a las agencias locales y estatales. Las personas afroamericanas y latinas, aunque usan drogas en tasas similares a las personas blancas,²² son desproporcionadamente arrestadas, y se les castiga más fuertemente en cada paso del sistema de justicia criminal.²³ Un estudio del Departamento de Justicia encontró que las personas afroamericanas y latinas son más propensas que las blancas a ser cateadas durante paradas de tránsito.²⁴ Las personas latinas y afroamericanas son desproporcionalmente detenidas, cuestionadas, y cateadas; aun cuando, en promedio, no son más propensas a estar en posesión de drogas que el promedio de las blancas.²⁵
- Una vez que la gente latina y afroamericana ha entrado en el sistema penal, se puede ejercer discriminación legal contra ellos cuando busquen empleo, educación o vivienda; apoyos gubernamentales como vales de alimentos y créditos educativos; e incluso pierden de por vida el derecho al voto.²⁶
- A pesar del encarcelamiento de decenas de millones de estadounidenses, y más de un *trillón* de dólares gastados, las drogas ilegales siguen siendo muy baratas²⁹, potentes³⁰ y accesibles.³¹ Los daños asociados – adicción,³² sobredosis,³³ y la propagación del VIH/SIDA³⁴ y la hepatitis B y C³⁵ – continúan presentes en todas las comunidades.
- Una revisión sistemática de más de 300 estudios internacionales encontró que cuando la policía ejerce “mano dura” contra la gente que usa o vende drogas, el resultado casi siempre es que se incrementa la violencia.³⁶ Dos estudios realizados en 1991 y 1999 encontraron que existe una correlación entre los incrementos sustanciales en la tasa de homicidios en Estados Unidos y la vigorosa aplicación de las leyes de prohibición, tanto del alcohol, como de las drogas.³⁷
- En años recientes, la escalada de la guerra contra las drogas en México y otros países de Latinoamérica ha llevado a la muerte de cientos de miles de personas.³⁸ Cientos, si no es que miles de estadounidenses mueren en las calles debido a la violencia causada por la guerra contra las drogas cada año, aunque pasan casi desapercibidas.³⁹

El fracaso de enfocarse en la oferta

- Las estrategias de control de drogas que se enfocan en interrumpir la oferta han fallado una y otra vez para la cocaína, heroína, marihuana, y prácticamente todas las otras drogas para las cuales han sido aplicadas, incluyendo el alcohol durante la época de la prohibición en Estados Unidos.²⁷ Principios económicos fundamentales demuestran que mientras haya una demanda para alguna droga, alguna oferta surgirá a un costo que pueda satisfacerla.²⁸ Más allá de su ineffectividad, las estrategias que se enfocan en la oferta desatan fuerzas implacables que buscarán continuar cultivando o traficando, generando consecuencias que en muchos casos terminan haciendo más grande el problema.

Escándalos y violaciones a los derechos humanos

Oficina del Inspector General

- En mayo de 2014, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia lanzó numerosas investigaciones sobre distintos escándalos de la DEA, incluyendo la masacre de civiles en Honduras, el uso de datos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) para espiar virtualmente a todos los estadounidenses y sistemáticamente fabricar evidencia, y buscar información de pasajeros en vuelos.⁴⁰

“Construcción paralela” y escándalos de espionaje

- El 8 de abril de 2015, *USA Today* publicó un artículo titulado *U.S. secretly tracked phone calls for decades*.⁴¹ [Estados Unidos rastreó secretamente llamadas telefónicas durante décadas.] El reportaje denunció que la DEA y el Departamento de Justicia han recopilado secretamente grabaciones de miles de millones de llamadas telefónicas hechas por estadounidenses por décadas. El programa fue el primer esfuerzo de Estados Unidos para reunir datos en masa de ciudadanos estadounidenses, sin importar si eran o no sospechosos de haber cometido un delito; y sentó la base para programas de espionaje post 9-11. Así, la DEA construyó el estado de vigilancia actual. La organización *Human Rights Watch* presentó una demanda contra la DEA por violar el derecho constitucional de millones de estadounidenses al espiarles sin su conocimiento.⁴²
- El 5 de agosto de 2013, Reuters publicó un artículo de John Shiffman y Kristina Cooke titulado *U.S. directs agents to cover up program used to investigate Americans*.⁴³ [Estados Unidos ordena a agentes encubrir programa usado para investigar a estadounidenses.] La pieza reportaba que la DEA ha colaborado con la NSA, así como la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por sus siglas en inglés) y otras agencias, para espiar en ciudadanos estadounidenses en el nombre de la guerra contra las drogas. También reveló que agentes de la DEA están creando, y animando a otras agencias a crear, pistas falsas en investigaciones para enmascarar el origen de la información, proceso llamado “construcción paralela” (*parallel construction*). Fiscales, jueces, y defensas argumentan actualmente que este complot ha arrebatado a los enjuiciados su derecho a un juicio justo. Puede que cientos de miles de casos hayan sido afectados.
- El 2 de septiembre de 2013, *New York Times* publicó un artículo de Scott Shane y Colin Moynihan titulado *Drug Agents Use Vast Phone Trove, Eclipsing N.S.A.'s*. [Agentes antidrogas usan vasto caudal de llamadas.] El artículo difundía que la DEA ha accedido de manera regular a una vasta base de datos de AT&T para obtener grabaciones de llamadas de

estadounidenses y perseguir casos criminales y condenas por delitos de drogas. En respuesta a estas historias, el Departamento de Justicia sólo dijo que “analizaría los problemas causados por esta historia.”

- El 19 de mayo de 2014, *The Intercept* publicó un artículo de Ryan Devereaux, Glenn Greenwald y Laura Poitras sobre un programa secreto de la NSA, llamado “SOMALGET”, que grababa llamadas telefónicas en las Bahamas, incluyendo aquellas de ciudadanos estadounidenses.⁴⁴ La DEA proveía de una cubierta al abrir investigaciones en ciertos individuos y cuando contratistas independientes instalan los aparatos para escuchar y grabar las llamadas, la NSA usa el acceso para entrar a todo el sistema nacional de telefonía, grabando información personal de millones de personas, incluyendo la de los casi cinco millones de estadounidenses que visitan Bahamas cada año. Como se nota en el reportaje, “Si la NSA está usando la relación de la DEA con las Bahamas para encubrir la grabación en secreto de las llamadas telefónicas de todo el país, podría ponerse en peligro la larga tradición de cooperación en el cumplimiento del derecho internacional que Estados Unidos goza con sus aliados.”

Colusión y colaboración con Cártels

- En 2011, en el contexto del escándalo “Rápido y Furioso” del Departamento de Justicia, salió a la luz que agentes de la DEA traficaron o lavaron millones de dólares fruto de la venta de drogas para cárteles de la droga mexicanos como parte de una operación que aún continúa, la cual se ha acercado demasiado a alentar al crimen en vez de prevenirlo.⁴⁵
- En enero de 2014, una investigación del periódico mexicano *El Universal* reveló que de 2000 a 2014 la DEA hizo un pacto con el cártel de Sinaloa, permitiéndole traficar miles de millones de dólares en drogas, a cambio de información sobre cárteles rivales.⁴⁶

- De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia, varios agentes de la DEA – algunos con autorizaciones de seguridad ultra-secretas – supuestamente participaron en múltiples orgías con trabajadoras sexuales “financiadas por cárteles de droga locales.”⁴⁷ Algunos agentes incluso recibieron dinero, regalos, y armas de parte de estos narcotraficantes. Las fiestas ocurrieron en cuarteles oficiales, presentando la “posibilidad de que equipos e información de la DEA pudieran haber sido puestos en peligro como consecuencia de la conducta de los agentes.”

Mal uso de informantes

- Al igual que otras agencias de seguridad, la DEA utiliza informantes confidenciales para obtener la información necesaria para armar los casos. Desafortunadamente, esta agencia ha demostrado constante ineptitud para garantizar la confiabilidad de sus informantes, resultando en falsos testimonios y encarcelamientos injustos. El “supersoplón” Andrew Chambers es, según reportes, el informante mejor pagado de la DEA en la historia, a quien han pagado \$2.2 millones de dólares.
- Se ha reportado también que ha dado testimonios falsos en al menos 16 casos. Aunque Chambers fue desactivado como informante en 2000, fue reactivado en 2013, cuando trabajó encubierto con agentes de la DEA en un caso de Arizona.⁴⁸
- El agente e informante de la DEA en Cleveland, Jarrell Bray, trabajó en una investigación por drogas que resultó en una veintena de desafueros. Pero casi todos los cargos fueron removidos y las personas que habían sido encarceladas salieron de prisión después de que Bray confesó haberlos implicado.⁴⁹

Muertes y abusos

- En 2003, agentes de la DEA hirieron fatalmente a Ashley Villarreal, de 14 años. Durante un operativo, agentes vestidos de civil en vehículos sin marcas detuvieron el automóvil que Villarreal manejaba para arrestar a su acompañante. Según los agentes, Villarreal siguió manejando y ellos abrieron fuego contra la adolescente, quien murió tres días después debido a estas heridas.⁵⁰
- En 2010, Alberto Arriaga fue arrestado por agentes de la DEA después de que supuestamente participó en una venta de drogas. Cuando estaba en custodia, Arriaga tenía dolor abdominal y dijo que los agentes que lo habían arrestado le habían golpeado. Murió 16 horas después. La investigación forense reveló que las costillas de Arriaga estaban rotas en 21 lugares, y clasificaron su muerte como un homicidio. La DEA ha obstaculizado los esfuerzos para investigar la muerte de Arriaga, impidiendo que los agentes involucrados en su arresto cooperen con las investigaciones.⁵¹
- En mayo de 2012, la DEA participó en una operación de guerra contra las drogas en Ahuas, Honduras, que culminó en la masacre de cuatro civiles indígenas. Miembros de ambas cámaras del Congreso estadounidense, así como grupos de derechos humanos, han llamado continuamente a la DEA a resolver preguntas sobre su rol en el incidente.⁵² En 2012, un memo de la Oficina del Inspector General reveló que “hasta la fecha, la DEA no ha cooperado con DS [Agencia de Seguridad Diplomática de EE.UU.] y la investigación no puede proseguir.”⁵³
- En 2013, la DEA causó revuelo cuando Daniel Chong, de 23 años, fue detenido después de una redada en casa de un amigo. Aunque los cargos de Chong fueron removidos totalmente, el personal de la DEA olvidó que él seguía encerrado en una celda sin ventanas, y sin comida ni agua. Cinco días después, Chong fue hallado por el personal y estaba sufriendo un agudo fallo renal y deshidratación.⁵⁴

Ignorando la ciencia

- La DEA se ha interpuesto a la reclasificación de drogas con valor médico desde sus inicios. Aunque la primera petición para reevaluar la marihuana fue presentada a la DEA en 1972, el veredicto le tomó a la agencia 16 años y varias demandas legales. Después de dos años de audiencias, el Juez de Derecho Administrativo (ALJ, por sus siglas en inglés) de la DEA, Francis Young, determinó que la marihuana debía ser reclasificada, pues no cumplía con los criterios legales para la Lista I. Sin embargo, la decisión del juez Young fue anulada por el entonces administrador de la DEA, John Lawn.⁵⁵
- En 1986, de manera similar, Lawn anuló los hallazgos de un ALJ en el caso del MDMA. Cuando el ALJ había recomendado que la droga fuera clasificada en la Lista III, Lawn rechazó el fallo y colocó al MDMA en la Lista I.⁵⁶
- A pesar de la evidencia científica que respalda los beneficios médicos de la marihuana, y del apoyo de la Asociación Estadounidense de Medicina (*American Medical Association*) y el Colegio Estadounidense de Médicos (*American College of Physicians*) para expandir las investigaciones sobre la marihuana medicinal, la DEA rechazó una petición para reclasificar la marihuana en 2011. Actualmente hay otra petición bajo revisión, solicitada por la gobernadora de Washington, Christine Gregoire; el gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee; y el gobernador de Colorado, John Hickenlooper.⁵⁷
- El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) mantiene el monopolio de la producción de marihuana para fines de investigación. El gobierno federal no mantiene el monopolio de la producción de ninguna otra droga. Como resultado, es difícil que la planta de marihuana fumada sea reconocida como medicamento aprobado por la FDA.

- La DEA hace más grande el problema al proteger el monopolio del NIDA. El caso del Profesor Lyle Craker, director del Programa de Plantas Medicinales de la Universidad de Massachusetts-Amherst, es un caso paradigmático.
- El Dr. Craker había pedido permiso para cultivar marihuana e investigar sus beneficios médicos. Después de años de disputas legales, la ALJ Ellen Bittner emitió una decisión sobre el interés público de terminar con el monopolio que el NIDA había tenido por décadas en la producción de la marihuana para investigación.⁵⁸
- Una vez más, la dirección de la DEA ignoró la decisión de la ALJ y negó la petición del Dr. Craker, protegiendo el monopolio federal.⁵⁹

Se necesitan reformas drásticas

A la luz de décadas de escándalos y fracasos, está claro que reformas importantes son necesarias a la DEA.

La meta tradicional en las políticas de drogas de los Estados Unidos de realizar trabajos encubiertos, arrestos, persecuciones, encarcelaciones, y la erradicación de drogas en los países productores para crear un “Estados Unidos libre de drogas” ha fallado rotundamente al reducir el uso de drogas o los daños relacionados. En cambio, ha creado problemas nuevos: familias destrozadas, incrementos a la pobreza y las disparidades raciales, dinero gastado de los contribuyentes, sobrepoblación en las prisiones, y el deterioro de las libertades civiles.

Si el gobierno federal continúa con las medidas que ha tomado hasta ahora – de perseguir las drogas mediante la justicia criminal – debe enfocarse en tratar los tipos “Al Capone” que la prohibición crea, pero de manera estratégica. Esto significa enfocarse en los traficantes y grupos criminales más peligrosos, y sólo aquellos que los recursos del gobierno federal puedan perseguir, haciéndolo de una manera que minimice tanto como sea posible los daños colaterales de la aplicación de estas leyes.

Se ha argumentado a favor de eliminar a la DEA y cambiar sus estatutos y funciones a una agencia de salud, y que sus agentes y otros recursos sean cambiados por varios departamentos sobre crimen organizado dentro del Departamento de Justicia. Tres administraciones presidenciales han realizado revisiones para determinar si sería más eficiente y mejor para la seguridad pública juntar a la DEA con la FBI (Carter, Reagan, and Clinton),⁶⁰ pero el Congreso nunca ha tomado seriamente estas propuestas.

Si las funciones de la DEA no se unen con las de otras agencias, entonces su misión e indicadores deben cambiar para reflejar la meta de la reducción de la violencia. Su estrategia debería ser decidida por el Procurador General en consulta con otros. Compras encubiertas de drogas, arrestos y procesos penales, e infiltración en grupos criminales deben ser utilizados para avanzar las más importantes metas de seguridad de los Estados Unidos.

Esto puede ser estrictamente limitado a la seguridad nacional (arrestar a los líderes de cárteles que amenazan con desestabilizar México y crear caos en la frontera sur, o cortar dinero que va a los talibanes); o al control del crimen más generalmente (trayendo ante la justicia a los más peligrosos líderes del crimen organizado dentro del país).

Las agencias de aplicación de leyes de drogas deben enfocarse en casos grandes que cruzan fronteras nacionales y estatales, dando prioridad a los traficantes violentos y organizaciones criminales mayores. Todos los demás casos deben ser manejados por los estados. Los indicadores de las operaciones deben pasar de ser números de incautos, decomisos, y arrestos a resultados más específicamente medidos, como la captura de individuos específicos.

¹ Carl Hulse, "Unlikely Cause Unites the Left and the Right: Justice Reform," *New York Times*, Feb. 18 2015; Lauren Fox, "This Is How Justice Reform Can Actually Happen This Year," *National Journal*, Feb. 2 2015; Niels Lesniewski, "Odd Couples Push Criminal Justice Overhauls (Updated)," *Roll Call*, Feb. 12 2015.

² Eric Holder, "Remarks at the Annual Meeting of the American Bar Association's House of Delegates, San Francisco, August 12, 2013," (Office of the Attorney General, United States Department of Justice, 2013).

³ Roy Walmsley, *World Population List, 10th Ed.* (London: International Centre for Prison Studies, 2013); National Research Council, *The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences* (Washington, D.C.: The National Academies Press, 2014).

⁴ E. Ann Carson, "Prisoners in 2013," (Washington, DC: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 2014), Tables 13 & 14.

⁵ Meda Chesney-Lind and Marc Mauer, *Invisible Punishment: The Collateral Consequences of Mass Imprisonment* (The New Press, 2011); American Bar Association, "National Inventory of Collateral Consequences of Conviction," <http://www.abacollateralconsequences.org/map/>.

⁶ Department of Justice, Office of the Inspector General, "Ongoing Work: Drug Enforcement Administration," accessed 15 April 2015, <http://www.justice.gov/oig/ongoing/dea.htm>.

⁷ Brad Heath, "U.S. Secretly tracks calls for decades", *USA Today*, April 8, 2015; John Shiffman and Kristina Cooke, "Exclusive: U.S. Directs Agents to Cover Up Programs Used to Investigate Americans," *Reuters*, August 5, 2013; Ryan Devereaux, Glenn Greenwald and Laura Poitras, "Data Pirates of the Caribbean: The NSA Is Recording Every Cell Phone Call in the Bahamas," *The Intercept*, First Look Media, www.firstlook.org/theintercept, May 19th, 2014.

⁸ Bob Wiedrich, "Lawmen oppose merger," *Chicago Tribune*, May 6, 1977; James Coates, "FBI-DEA merger reportedly planned," *Chicago Tribune*, June 14, 1981; Neil A. Lewis, "White House Seeks to Combine F.B.I. With Drug Agency," *New York Times*, August 19 1993.

⁹ Drug Enforcement Administration, "DEA History," <http://www.dea.gov/about/history.shtml>, accessed 15 April 2015.

¹⁰ Drug Enforcement Administration, "DEA Fact Sheet," <http://www.dea.gov/docs/factsheet.pdf>, accessed 15 April, 2015.

¹¹ Drug Enforcement Administration, "Office Locations," <http://www.dea.gov/docs/factsheet.pdf>, accessed 15 April, 2015.

¹² Drug Enforcement Administration, "DEA Fact Sheet," <http://www.dea.gov/docs/factsheet.pdf>, accessed 15 April, 2015.

¹³ Drug Enforcement Administration, "Statistics and Facts," [Justice.gov](http://www.justice.gov/dea/resource-center/statistics.shtml#arrests), accessed 15 April, 2015, <http://www.justice.gov/dea/resource-center/statistics.shtml#arrests>.

¹⁴ United States Sentencing Commission, Report to Congress: Cocaine and Federal Sentencing Policy (Washington, D.C.: May 2007): 19, Figure 2-4, http://www.ussc.gov/Legislative_and_Public_Affairs/Congressional_Testimony_and_Reports/Drug_Topics/200705_RtC_Cocaine_Sentencing_Policy.pdf (accessed March 3, 2011).

¹⁵ United States Sentencing Commission, Report to Congress: Mandatory Minimum Penalties in the Federal Criminal Justice System (Washington, D.C.: October 2011): 167, D-61, Figure D-2, http://www.ussc.gov/Legislative_and_Public_Affairs/Congressional_Testimony_and_Reports/Mandatory_Minimum_Penalties/20111031_RtC_PDF/Chapter_08.pdf, (demostrando, "En los casos analizados, la función más común era "contrabandista" / "transportista" [muchas veces llamada "mula"], representando

23.0% de todos los ofensores, seguida por comerciante mayorista (21.2%), comerciante/vendedor al menudeo (17.2%) y proveedor/importador de alto nivel (10.9%)."

¹⁶ Bureau of Prisons, "Federal Inmate Population Declines," http://www.bop.gov/resources/news/20141024_populationDecline.jsp accessed 15 April 2015.

¹⁷ U.S. Department of Justice, "FY 2016 Budget Request Fact Sheet: Prisons and Detention," http://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/pages/attachments/2015/01/30/4_prisons_and_detention_fact_sheet.pdf, accessed 15 April 2015.

¹⁸ Americans for Safe Access, "What's the Cost? The Federal War on Patients," (2013) page 15.

¹⁹ Motivans, Mark, "Federal Justice Statistics, 2009" (Washington, DC: US Dept. of Justice Bureau of Justice Statistics, Dec. 2011), NCJ234184, p. 3. <http://www.bis.gov/content/pub/pdf/fjs09.pdf>.

²⁰ Michelle Alexander, *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness* (New York: The New Press, 2010), 69-70, 131.

²¹ <https://www.aclu.org/racial-justice/driving-while-black-racial-profiling-our-nations-highways>

²² US Department of Health and Human Services, Substance Abuse & Mental Health Services Administration, *National Survey on Drug Use & Health 2011* (Washington: US Department of Health and Human Services, 2012); Human Rights Watch, *Targeting Blacks: Drug Law Enforcement and Race in the United States* (New York: Human Rights Watch, 2008); and Michael Tonry, *Punishing Race: A Continuing American Dilemma* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 61-67.

²³ Ver, por ejemplo, Meghana Kakade et al., "Adolescent Substance Use and Other Illegal Behaviors and Racial Disparities in Criminal Justice System Involvement: Findings from a US National Survey," *American Journal of Public Health* 102 (2012):1307 (mostrando que los jóvenes negros usan drogas a tasas más bajas que los jóvenes blancos, pero sus probabilidades de ser arrestado por dichos delitos son mucho mayores, concluyendo que "las disparidades raciales en los arrestos de adolescentes parecen resultar del tratamiento diferencial de jóvenes de minorías raciales y tienen consecuencias negativas a largo plazo en las vidas de los jóvenes afro-americanos afectados."). Ver también, Human Rights Watch, *Targeting Blacks: Drug Law Enforcement and Race in the United States* (New York: Human Rights Watch, 2008), Human Rights Watch Report, Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the Criminal Justice System, vol. 12, no. 2 (G), May 2002, disponible en <http://www.hrw.org/legacy/reports/2000/usa/> (concluyendo que los afroamericanos y latinos son mucho más propensos de ser arrestados, perseguidos, y sentenciados a ir a prisión por largos períodos por violaciones a las leyes de drogas.)

²⁴ U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, "Contacts between police and the public, 2005," April 2007

²⁵ Rights Working Group, "Faces of Racial Profiling: A Report from Communities Across America," p. 21, and Amnesty International USA Fact Sheet: http://www.amnestyusa.org/racial_profiling/pdf/fivefacts.pdf

²⁶ Legal Action Center, Roadblocks to Reentry (2004), available at http://www.lac.org/roadblocks-to-reentry/upload/lacreport/LAC_PrintReport.pdf; Marc Mauer and Meda Chesney-Lind, eds., *Invisible Punishment: The Collateral*

Consequences of Mass Imprisonment (New York: The New Press, 2002); y American Bar Association Commission on Effective Criminal Sanctions and the Public Defender Service for the District of Columbia, "Internal Exile: Collateral Consequences of Conviction in Federal Laws and Regulations." January 2009.

²⁷ Ver, por ejemplo, Boyum, David, Reuter, Peter, "An Analytic Assessment of U.S. Drug Policy," *American Enterprise Institute Press*, Washington, D.C., (2005). Reuter, Peter. "The Limits of Supply-Side Drug Control," *The Milken Institute Review*, Santa Monica, CA, First Quarter 2001: 15-23. Youngers, Coletta, Rosin, Eileen, Ed. "Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy," *Washington Office on Latin America Special Report*, Washington, D.C., November 2004: 1-5.

²⁸ Reuter, Peter, "The Limits of Supply-Side Drug Control," *The Milken Institute Review*, Santa Monica, CA, First Quarter 2001: 15-23.

²⁹ Jonathan P Caulkins and Peter Reuter, "How Drug Enforcement Affects Drug Prices," *Crime and Justice* 39, no. 1 (2010); David A Bright and Alison Ritter, "Retail Price as an Outcome Measure for the Effectiveness of Drug Law Enforcement," *International Journal of Drug Policy* 21, no. 5 (2010); Cláudia Costa Storti and Paul De Grauwe, "Globalization and the Price Decline of Illicit Drugs," *ibid.* 20, no. 1 (2009); C. Costa Storti and P. De Grauwe, "The Cocaine and Heroin Markets in the Era of Globalisation and Drug Reduction Policies," *Int J Drug Policy* 20, no. 6 (2009). Ver también, Arthur Fries et al., "The Price and Purity of Illicit Drugs: 1981-2007, Institute for Defense Analysis, IDA Paper P-4369 (October 2008), II-1—VI-1, available at http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/price_purity/price_purity07.pdf.

³⁰ Fries et al., *The Price and Purity of Illicit Drugs: 1981-2007*, and Boyum D and Reuter P, "An Analytic Assessment of U.S. Drug Policy," *American Enterprise Institute Press*, 2005, pp. 77-78.

³¹ Ver, por ejemplo, U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Office of Applied Studies. (2012). *Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables*, Table 7.3B – Types of Illicit Drug Use in the Past Month among Persons Aged 12 or Older: Percentages, 2002-2011." <http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2011SummNatFindDefTables/NSDUH-DefTabsPDFWHTML/2011/2k11DetailedTabsWeb/HTML/NSDUH-DefTabsTOC2011.htm>; Johnson, L. D., O'Malley, P. M., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (December 19, 2012). "The rise in teen marijuana use stalls, synthetic marijuana use levels, and use of 'bath salts' is very low." University of Michigan News Service: Ann Arbor, MI, <http://www.monitoringthefuture.org/data/12data.html>; United Nations, Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2012*, 18-19, <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html>; and Caulkins, Jonathan P., Peter Reuter, Martin Y. Iguchi, and James Chiesa. RAND Drug Policy Research Center, "How Goes the 'War on Drugs'? An Assessment of US Drug Problems and Policy." 2005.

³² U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Office of Applied Studies. (2012). *Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: National findings*, <http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k11Results/NSDUHresults2011.htm>.

³³ Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Compressed Mortality File 1999-2009. CDC WONDER Online Database, compiled from Compressed Mortality File 1999-2009 Series 20 No. 20, 2012; US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, "Vital Signs: Overdoses of Prescription Opioid Pain Relievers – United States, 1999-2008, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), November 4, 2011 / 60(43);1487-1492; and US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, "Drug Poisoning Death in the United States, 1980-2008," NCHS Data Brief, No. 81, December 2011.

³⁴ Global Commission on Drug Policy. "The War on Drugs and HIV/AIDS: How the Criminalization of Drug Use Fuels the Global Pandemic." 2012; and U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Estimates of New HIV Infections in the United States, 2006–2009, (2011), <http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/HIV-Infections-2006-2009.pdf>.

³⁵ U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, "Surveillance for Acute Viral Hepatitis – United States, 2010", <http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2010Surveillance/PDFs/2010HepSurveillanceRpt.pdf>.

³⁶ International Centre for Science in Drug Policy, Effects of Drug Law Enforcement on Drug-Related Violence: Evidence from a Scientific Review (2010), 22, available at http://www.icsdp.org/docs/ICSDP-1_percent20-percent20FINAL.pdf.

³⁷ Friedman, Milton, "The War We Are Losing," in *Searching for Alternative: Drug-Control Policy in the United States*, M.B. Krauss and E.P. Lazear, eds. (Hoover Institution: Stanford, CA: 1991), 53-67; Jeffrey A. Miron, "Violence and the U.S. Prohibitions of Drugs and Alcohol," *American Law and Economics Review* 1-2 (1999): 78-114, available at <http://aler.oxfordjournals.org/content/1/1/78.full.pdf>.

³⁸ En México, más de 100,000 personas han sido asesinadas, 25,000 han desaparecido, y cientos de miles han sido desplazadas debido a la violencia relacionada con la prohibición en los últimos seis años, mientras varios países Centroamericanos tienen algunas de las tasas más altas de asesinatos en el mundo, llevando a Naciones Unidas a catalogar la región como la más violenta fuera de las guerras activas. Ver, por ejemplo, Booth, William. *Mexico's crime wave has left about 25,000 missing, government documents show*. *Washington Post* (2012); David A. Shirk, *The Drug War in Mexico* Confronting a Shared Threat, Council on Foreign Relations (2012), http://li.cfr.org/content/publications/attachments/Mexico_CSR60.pdf; and United Nations, "Drug-related violence has reached alarming levels in Central America – UN," (February 2012), http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41407&Cr=drug+trafficking&Cr1=#.UQI_qr88CS0. Ver también, Cory Molzahn, Octavio Rodríguez Ferreira, and David A Shirk, "Drug Violence in Mexico: Data and Analysis through 2012," (Trans-Border Institute, 2013); "Epn En 100 Días: 4 Mil 549 Ejecuciones," *Zeta*, 11 de marzo, 2013; Angélica Mercado, "Violencia Saca De Sus Pueblos a 1.2 Millones," *Milenio*, 19 de noviembre, 2012; Gloria Leticia Diaz, "Desplazados 1.6 Millones De Mexicanos Por Guerra Contra El Crimen Organizado," *Proceso*, 28 de noviembre, 2011.

³⁹ "Crime in the United States 2011 - Arrests," FBI Uniform Crime Report, "Murder Circumstances, by Sex of Victim, 2011," (Washington, DC: US Dept. of Justice, October 2012), <http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/expanded-homicide-data-table-13> (reportando que en 2011 un estimado de 14,612 personas fueron asesinadas, incluyendo al menos 390 que el FBI atribuye a las leyes de drogas. Otras 494 fueron catalogadas "asesinatos de tierras de gangsters" y más de 5,000 por causas desconocidas <http://www.justice.gov/oig/ongoing/dea.htm>

⁴⁰ Brad Heath, "U.S. Secretly tracks calls for decades", *USA Today*, April 8, 2015.

⁴¹ Brad Heath, "New lawsuit says DEA surveillance was illegal", *USA Today*, April 8, 2015.

⁴² John Shiffman and Kristina Cooke, "Exclusive: U.S. Directs Agents to Cover Up Programs Used to Investigate Americans," *Reuters*, August 5, 2013.

⁴³ Ryan Devereaux, Glenn Greenwald and Laura Poitras, "Data Pirates of the Caribbean: The NSA Is Recording Every Cell Phone Call in the Bahamas," *The Intercept*, *First Look Media*, www.firstlook.org/theintercept, May 19th, 2014.

⁴⁴ Richard A. Serrano, "DEA acknowledges supporting role in Operation Fast and Furious," *Los Angeles Times*, accessed September 3, 2013, <http://articles.latimes.com/2011/aug/05/news/la-pn-fast-furious-20110805>.

⁴⁵ Doris Gómera, "La guerra secreta de la DEA en México," *El Universal*, January 6, 2014, <http://blog.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/la-guerra-secreta-de-la-dea-en-mexico-212050.html>, accessed 15 April 2015.

⁴⁶ "Tim Devaney, "DEA in hot seat over sex scandal", *The Hill*, April 14, 2015. <http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/06/05/dea-reactivates-contraband-informant/2390989/>

⁴⁷ John Kroll, "Mansfield drug case gone wrong: The inside story," *Cleveland Plain Dealer*, June 22, 2008, http://blog.cleveland.com/metro/2008/06/dea_prosecutions_gone_wrong_t/print.html, accessed 15 April 2015.

⁴⁸ <http://stopthedrugwar.org/chronicle-0ld/275/selfdefense.shtml>

⁴⁹ <http://articles.latimes.com/2012/dec/20/local/la-me-lapd-dea-20121220>

⁵⁰ Guy Wilson, "Government won't probe of DEA raid in Honduras," *Washington Times*, accessed September 3, 2013, <http://www.washingtontimes.com/news/2013/feb/12/no-probe-of-dea-raid-in-honduras/?page=all>.

⁵¹ <http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/leaked-state-department-memos-dea-shootings-in-honduras-portion-dissected>

⁵² "DEA Forgets College Student in Cell, Awarded \$4 Million," *KFOR-TV*, July 30, 2013.

⁵³ Drug Policy Alliance and Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, "The DEA: Four Decades of Impeding and Rejecting Science," (Drug Policy Alliance, 2014).

⁵⁴ "In the matter of MDMA Rescheduling, Docket No. 84-48: Order from John C. Lawn, DEA Administrator," August 15, 1986, <http://www.maps.org/dea-mdma/pdf/0116.PDF>; *Federal Register*, Vol. 51, No. 198, October 14, 1986, <http://www.maps.org/deamdma/pdf/0198.PDF>.

⁵⁵ Drug Policy Alliance and Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, "The DEA: Four Decades of Impeding and Rejecting Science."

⁵⁶ In re Lyle E. Craker, Ph.D., Opinion and Recommended Ruling, 76 FR 51403-03, (August 18, 2011), 2011 WL 3607371.

⁵⁷ Lyle E. Craker v. Drug Enforcement Administration, "On Petition for Review of a Final Order of the United States Drug Enforcement Administration," United States Court of Appeals for the First Circuit, No. 09-1220, April 15, 2013.

⁵⁸ Bob Wiedrich, "Lawmen oppose merger," *Chicago Tribune*, May 6, 1977; James Coates, "FBI-DEA merger reportedly planned," *Chicago Tribune*, June 14, 1981; Lewis, "White House Seeks to Combine F.B.I. With Drug Agency."